

GUATEMALA

**Programa de 35 Puntos para poner fin a la Impunidad
y a las Violaciones de Derechos Humanos en
Guatemala**

**Recomendaciones de Amnistía Internacional
a las autoridades de Guatemala**

**35-Point Program to End Impunity and Human Rights
Violations**

**Amnesty International Recommendations to the
Guatemalan authorities**

UN PROGRAMA DE 35 PUNTOS PARA PONER FIN A LA IMPUNIDAD Y LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN GUATEMALA

Recomendaciones a las autoridades de Guatemala

El gobierno, el Ministerio Público, el Congreso y el poder judicial tienen el deber de hacer cuanto sea posible en sus respectivos ámbitos de responsabilidad para romper el ciclo de la impunidad en Guatemala.

Sus esfuerzos deben concretizarse en una serie de acciones que Amnistía Internacional presenta como:

“Programa de 35 puntos para poner fin a la impunidad y a las violaciones de derechos humanos en Guatemala”.

Llevar a los responsables ante la justicia

1. Las autoridades asegurarán que todos los informes y denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas se investigan sin dilación, con imparcialidad y efectividad y que tal investigación corre a cargo de un órgano independiente de los presuntos responsables, dotado de las facultades y los recursos necesarios para llevarla a cabo. Los métodos y las conclusiones de la investigación deben hacerse públicos.

Las investigaciones de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas seguirán los *Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias* y la *Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas*.

Los agentes de las fuerzas de seguridad responsables de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, serán enjuiciados de acuerdo a las normas internacionales para un juicio justo. Este principio deberá mantenerse en todos los casos, con independencia del lugar en que se encuentren los responsables, del lugar en que se cometiera el delito y de la nacionalidad de los perpetradores o de las víctimas.

El gobierno ejecutará inmediatamente las órdenes de captura pendientes contra agentes de las fuerzas de seguridad y policías privados, y los detendrá, como procede en un Estado de Derecho.

Esta recomendación implica también que, cuando dispongan de indicios de la participación de un agente de las fuerzas de seguridad en “desapariciones”, ejecuciones extrajudiciales y torturas, las autoridades pertinentes dispondrán que sea inmediatamente suspendido de su cargo, pendiente de juicio, y harán pública esta decisión.

También establecerán un sistema de información para asegurar que ningún agente de las fuerzas de seguridad destituido por su posible implicación en una violación de derechos humanos pasa a cumplir tareas similares en otros departamentos oficiales.

Igualmente las autoridades actuarán de oficio para que la ausencia de denuncia por parte de la víctima o sus familiares no sirva para poner término ni para impedir que se abra una investigación.

2.El gobierno evitará introducir cualquier medida legislativa, como la ya aprobada Ley de Reconciliación Nacional, que pueda impedir la investigación de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes de las fuerzas de seguridad, el procesamiento de éstos, su condena en caso de ser declarados culpables y la reparación adecuada a las víctimas, y anulará las disposiciones pertinentes de las anteriores leyes de amnistía.

El gobierno también evitará las medidas de gracia *de hecho*. La organización estima que, conjuntamente con una desmovilización verificada por organismos independientes del poder ejecutivo, deben iniciarse investigaciones para llevar ante la justicia a los ex comisionados militares y miembros de los CVDC responsables de graves violaciones de derechos humanos como torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

3.La Comisión de Esclarecimiento Histórico deberá identificar tanto a los autores materiales de las torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas como a sus autores intelectuales, estableciendo la responsabilidad de la cadena de mando. Tendrá acceso a declaraciones, pruebas documentadas u otra información que pudiera estar relacionada con inteligencia militar o de las fuerzas de seguridad si fuera pertinente para el caso o situación que esté investigando. Los

archivos médico-legales y los expedientes judiciales existentes también deberán ponerse a su disposición. Los funcionarios civiles o militares, tanto en activo como retirados, estarán obligados a colaborar con las investigaciones de la Comisión.

Amnistía Internacional considera que, para cimentar un clima que favorezca el respeto de los derechos humanos en Guatemala, el proceso impulsado por la Comisión debe basarse en el conocimiento cabal de *toda* la verdad sobre violaciones y abusos contra los derechos humanos cometidos durante el periodo investigado. Todas las víctimas y sus familiares tienen derecho a registrar oficialmente sus casos y a que se esclarezcan completamente los hechos.

La Comisión estará facultada para investigar la suerte y el paradero de las personas que fueron víctimas de desaparición forzada después de su captura por agentes del Estado o por individuos vinculados a éstos. Esta investigación debe identificar la ubicación de cementerios clandestinos.

La Comisión investigará los homicidios deliberados y arbitrarios, atribuidos a la URNG y a anteriores grupos de oposición armada, de personal militar o personas vinculadas al estamento castrense, agentes del gobierno y otras personas capturadas por estos grupos. Amnistía Internacional considera que tanto las ejecuciones deliberadas y arbitrarias como las torturas infligidas a personas privadas de libertad por los grupos de oposición armada deben ser competencia de la Comisión. Amnistía Internacional pide a la URNG que proporcione a la Comisión la información necesaria para que lleve a cabo estas investigaciones.

Asimismo la Comisión podrá y deberá recomendar medidas de orden legal, político o administrativo destinadas a prevenir la repetición de tales hechos, e insistirá en que los resultados de sus investigaciones sean asumidos por los tribunales de justicia competentes.

Igualmente la Comisión debe lograr que se considere a los oficiales superiores responsables de los actos cometidos por funcionarios a sus órdenes cuando existan razones suficientes para suponer que pudieron haber prevenido o sancionado dichos actos.

La Comisión se asegurará de que todas las víctimas de estos abusos y violaciones de derechos humanos, así como sus familiares, reciben la indemnización y la reparación prescritas en las normas internacionales.

Finalmente, la Comisión recibirá del Estado los recursos humanos y materiales adecuados para garantizar el examen efectivo de la totalidad de las pruebas y denuncias.

4. Las autoridades pertinentes asegurarán que todas las denuncias relativas a cementerios clandestinos se investigan sin dilación, con imparcialidad y eficacia y que el órgano investigador es independiente de los presuntos responsables y está dotado de las facultades y los recursos necesarios para llevar a cabo tales investigaciones. Los métodos y las conclusiones de las mismas se harán públicas.

La metodología de las exhumaciones, autopsias y análisis de restos óseos debe ajustarse a los protocolos modelo propuestos por las Naciones Unidas y basados en los *Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias* y en el Protocolo Modelo de Autopsia incluido en el *Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias*.

El gobierno, a través de la apropiada cadena de mando, asegurará la colaboración del ejército en las investigaciones, dejando claro que la destrucción de pruebas, la obstrucción de la justicia o las amenazas proferidas contra las personas involucradas en las exhumaciones no se tolerarán, sino que se perseguirán penalmente.

5. El gobierno desarticulará a los “escuadrones de la muerte”, ejércitos privados, bandas criminales y fuerzas paramilitares que, aunque fuera de la cadena de mando oficial, operan con el apoyo o consentimiento del Estado, y se asegurará de que los miembros de tales grupos que cometan ejecuciones extrajudiciales, torturas o desapariciones forzadas comparecen ante la justicia.

Prevención de las violaciones de derechos humanos

6. Los responsables de las fuerzas de seguridad deben mantener estrictamente la responsabilidad de la cadena de mando para asegurar que los agentes a sus órdenes no cometen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. Los oficiales que ordenen o permitan que los agentes bajo su mando cometan violaciones de derechos humanos serán llevados ante la justicia por tales actos.

7.El gobierno y las instituciones pertinentes del Estado deberán cumplir las recomendaciones del procurador de los derechos humanos, con la posibilidad de tener que rendir cuentas ante la justicia en caso de incumplimiento.

8.El gobierno, el poder judicial, el Congreso y el Ministerio Público deben comprometerse, pública e inequívocamente, a cumplir, en el ejercicio de sus funciones, el artículo 46 de la Constitución que establece «el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno», y deben reconocer, cumpliendo las recomendaciones de MINUGUA, la contribución de los organismos internacionales en la protección y defensa de los derechos humanos.

El gobierno se asegurará de que Guatemala ratifica la *Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas*.

También incorporará a la legislación de Guatemala los *Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias* y la *Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas*.

9.El gobierno garantizará una protección efectiva a las personas que corren peligro de ser ejecutadas extrajudicialmente o de “desaparecer”, como aquéllas que reciben amenazas de muerte.

A este fin, el gobierno y el Ministerio Público aportarán los recursos necesarios para hacer operativas las medidas establecidas por la Ley de Protección de Sujetos Procesales y Personas Vinculadas a la Administración de Justicia Penal¹ para proteger así a aquellas personas que son amenazadas o corren el riesgo de serlo durante el proceso judicial.

El gobierno y el Ministerio Público pondrán en práctica esta ley con efectos inmediatos y vinculándola a los procesos en los que ya se han producido amenazas, intimidaciones y violaciones de derechos humanos durante el proceso judicial -presuntamente por parte de agentes de las fuerzas de seguridad-. Las autoridades encargadas de su puesta en práctica rendirán cuentas periódicamente sobre la aplicación de esta ley.

10.El gobierno adoptará y publicará un código de conducta para todos los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado y policías privados que

¹ Decreto Núm. 70-96 del 27 de agosto de 1996.

operan como auxiliares de las fuerzas de seguridad. Este código estará basado en el *Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley* y en los *Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley*.

El incumplimiento de este código llevará de inmediato a acciones disciplinarias y persecución penal de los agentes implicados.

11.El gobierno asegurará que todos los agentes de las fuerzas de seguridad y policías privados reciben una capacitación apropiada en legislación nacional e internacional de derechos humanos y los medios para su protección.

Aplicación de las garantías judiciales

12. El gobierno dotará al Ministerio Público, al poder judicial y a la Procuraduría de los Derechos Humanos de los recursos técnicos y económicos que les permitan desarrollar adecuadamente sus funciones mediante una presencia coordinada, eficaz y permanente en todo el territorio nacional.

13.El gobierno acometerá con efecto inmediato las reformas del sistema judicial explicitadas en el *Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática* con el fin de garantizar el derecho al libre acceso a la justicia y el derecho a un juicio justo, rápido e imparcial, especialmente en lo referente al establecimiento de un Servicio Público de Defensa Penal de carácter autónomo, dotado de los recursos y personal necesarios para alcanzar todo el territorio nacional y que debe incluir disposiciones, en el marco del *Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas*, que faciliten un acceso sencillo y directo a la justicia para la población indígena.

14.Las normas internacionales relativas al poder judicial, incluyendo los *Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura*, se incorporarán a la legislación de Guatemala y se asimilarán a la práctica legal a fin de crear un poder judicial independiente, imparcial y eficaz. Para dar debido cumplimiento a estos Principios, se destinarán los recursos necesarios, y se investigarán con prontitud e imparcialidad las denuncias de corrupción, especialmente en casos de violación de derechos humanos.

Abolición de la pena de muerte

15El gobierno abolirá la pena de muerte, que viola el derecho fundamental a la vida, y ratificará el Segundo Protocolo Facultativo del *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*.

16.Mientras procede a su abolición, el gobierno no extenderá la aplicación de la pena de muerte para no transgredir las normas internacionales de derechos humanos, como la *Convención Americana sobre Derechos Humanos*, que en su artículo 4.2 establece: «tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente».

17.Mientras se procede a su abolición, el gobierno y las instancias judiciales pertinentes asegurarán todas las garantías procesales a los encausados en casos capitales, concretamente el derecho a gozar de las garantías mínimas de defensa. La pena de muerte sólo podrá imponerse cuando la culpabilidad del acusado se base en pruebas claras y convincentes.

La defensa de los encausados por delitos que pueden conllevar la pena de muerte debe ser realizada únicamente por abogados colegiados y en ejercicio.

Las garantías para los condenados a muerte deben seguir la legislación internacional pertinente, en concreto el *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos* y las *Salvaguardias para garantizar la protección de los condenados a la pena de muerte*, adoptadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

Protección de los defensores de los derechos humanos

18.El gobierno reconocerá públicamente la legitimidad de la función de los que defienden los derechos humanos y su “derecho a defenderlos”. También garantizará, de forma efectiva, el libre ejercicio del derecho a la promoción y defensa de los derechos humanos, y no impulsará ni favorecerá restricciones legales que puedan impedir su ejercicio.

19.El gobierno dará las instrucciones necesarias para garantizar que los discursos pronunciados por agentes de las fuerzas de seguridad cesan de vincular la defensa de los derechos humanos con actividades “subversivas”.

20. El gobierno, en cumplimiento del *Acuerdo Global sobre Derechos Humanos*, tomará todas las medidas necesarias para prevenir, de forma efectiva, que se amenace, intimide o se violen los derechos humanos de

los defensores. Los responsables de tales actos serán puestos a disposición de la justicia de forma inmediata.

21. El gobierno apoyará activamente la aprobación e incorporación, sin demora, a la legislación guatemalteca de la *Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos* que se está debatiendo en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, e impulsará, dentro del marco del sistema regional de protección de los derechos humanos, la elaboración de un proyecto de *Declaración Interamericana de Protección a los Defensores de Derechos Humanos*.

Reparación para las víctimas

22. Las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado, o por individuos que actuaran con el consentimiento del Estado, recibirán una reparación adecuada. Amnistía Internacional considera que la reparación debe incluir una indemnización económica y medidas de rehabilitación, así como cuidados y asistencia médica que ayuden a la víctima y a sus familiares a superar las secuelas de las lesiones físicas o psicológicas. También debe incluir las medidas legales necesarias para devolver a la víctima su dignidad y su reputación.

El organismo encargado de gestionar la reparación para las víctimas debe recibir los recursos necesarios para llevar a cabo su función.

23. El Congreso de la República agilizará la discusión de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Atención Integral a las Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, que se debate en el Congreso desde el 12 de marzo de 1996. Esta Ley se basará en el cumplimiento del *Acuerdo Global sobre Derechos Humanos* y en legislación internacional que reconoce el derecho de las víctimas a la reparación.

Protección de los retornados y desplazados internos

24. El gobierno cumplirá los *Acuerdos del 8 de Octubre de 1992 referentes al Retorno Colectivo y Organizado de la población refugiada a territorio guatemalteco* y el *Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Conflicto Armado*, y garantizará la protección y seguridad de retornados y desplazados internados.

Estas garantías incluirán la presencia permanente y coordinada de las autoridades civiles en las comunidades de retornados y desplazados internos. Esta presencia deberá contar con la cooperación de las comunidades de retornados y desplazados internos y organismos internacionales y con la participación del Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y la Procuraduría de los Derechos Humanos.

25.El gobierno, a través de la cadena de mando, dará órdenes explícitas a los comandantes de los destacamentos militares y jefes de los Comités Voluntarios de Defensa Civil cercanos a las comunidades de retornados y de desplazados internos que regresen a sus comunidades de origen, en el sentido de que deben actuar en el marco de las leyes nacionales e internacionales y que no se permitirá invocar ninguna circunstancia excepcional como justificación para violar los derechos humanos de estas personas. Si tales violaciones se producen, el gobierno asegurará que se inician investigaciones y que los responsables rinden cuentas ante la justicia.

26.El gobierno, a través de la cadena de mando, dará órdenes claras y explícitas a los agentes de las fuerzas de seguridad, especialmente al ejército y concretamente a los destacamentos militares cercanos a las comunidades de retornados, de que no se tolerarán en el futuro las declaraciones infundadas que vinculen a estas comunidades con la “subversión”

27.El gobierno asegurará la formación de agentes de las fuerzas de seguridad, especialmente el ejército y concretamente los destacamentos militares cercanos a las comunidades de retornados y desplazados internos, para que respeten en sus actividades diarias el *Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley* y los *Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley*.

Recomendaciones a la comunidad internacional

Garantizar el respeto de los derechos humanos y el fin de la impunidad

28.La comunidad internacional mantendrá su presencia e influencia en Guatemala, a través del trabajo de MINUGUA y del experto independiente de las Naciones Unidas, hasta que existan signos claros e inequívocos de que han terminado las políticas y las prácticas que propiciaban la comisión de graves violaciones de derechos humanos.

Por “signos claros e inequívocos” debe entenderse: pruebas de que comparecen ante la justicia los responsables de las violaciones de derechos humanos; de que no se cometen más ejecuciones extrajudiciales ni desapariciones forzadas ni se tortura, maltrata o amenaza de muerte; pruebas de la competencia y la capacidad del Estado para investigar las violaciones de derechos humanos de forma plena, independiente e imparcial, sin riesgo de injerencias de agentes de las fuerzas de seguridad en los procedimientos judiciales; y pruebas de la capacidad y competencia nacionales para supervisar y regular las instituciones oficiales responsables de proteger y defender los derechos humanos. Los criterios específicos que se fijen para determinar y medir tales avances se basarán en tendencias a largo plazo, y no en datos estadísticos a corto plazo.

Es importante, pues, que se aporten recursos suficientes para asegurar la continuidad de la misión de las Naciones Unidas y la protección de los derechos humanos a través de una verificación rigurosa de todos los acuerdos concertados en el marco del proceso de paz.

29.La comunidad internacional asegurará también que la verificación, seguimiento y denuncia de casos individuales de violación a los derechos humanos continúa siendo el centro y la máxima prioridad del componente de derechos humanos de la misión de las Naciones Unidas en Guatemala y que las medidas pacificadoras, como la reforma institucional y legislativa y la educación y la formación, complementen siempre a la función de verificación.

30.A fin de supervisar la aplicación plena de las recomendaciones formuladas por MINUGUA en virtud del *Acuerdo Global sobre Derechos Humanos*, se establecerán mecanismos nacionales e internacionales que aborden su incumplimiento. Tales mecanismos deberán buscar garantías de que los que hayan cometido, autorizado, planeado o encubierto violaciones de derechos humanos comparecen ante la justicia y de que se adoptan medidas disciplinarias apropiadas contra quienes obstruyan la aplicación de las recomendaciones o no las apliquen plenamente. Estos mecanismos deberán establecerse con la colaboración y participación de

las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y deberán prestar una atención especial a la supervisión de la judicatura y del sistema judicial.

31. Deberá proporcionarse asistencia para proteger los proyectos de derechos humanos ya iniciados por MINUGUA destinados a la consecución de instituciones nacionales *permanentes, independientes y eficaces* para la protección a largo plazo de los derechos humanos y la restauración del Estado de Derecho, como son una judicatura independiente y un sistema de justicia penal con las debidas garantías. Aunque Amnistía Internacional considera que los organismos nacionales, en particular las comisiones de derechos humanos, pueden desempeñar un papel muy importante en el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos, nunca deben sustituir o disminuir las salvaguardias inherentes a unas estructuras legales completas y eficaces, aplicadas por una judicatura independiente y accesible. Es importante que estas iniciativas vayan acompañadas de una política firme contra la inmunidad, a fin de impedir que tales instituciones sirvan más para proteger que para descubrir a los que han violado los derechos humanos.

32. Finalmente, antes de la retirada final de MINUGUA, la comunidad internacional establecerá salvaguardias que garanticen la protección de las personas que han colaborado con la misión, y la protección de la información recabada por ésta.

Colaboración con la Comisión de Esclarecimiento Histórico

33. Los gobiernos deben poner a disposición de la Comisión para el Esclarecimiento de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que han Causado Sufrimiento a la Población Guatemalteca (también conocida como Comisión de Esclarecimiento Histórico) toda la información disponible sobre la colaboración de funcionarios de otros gobiernos con funcionarios guatemaltecos destinada a favorecer, impulsar o encubrir violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, o abusos perpetrados por los grupos de oposición armada, durante el periodo investigado. Esta información debe incluir la transferencia internacional de material, tecnología o formación militar, policial o de seguridad cuyo principal propósito en la práctica sea la violación de los derechos humanos.

Formación policial y militar

34. La comunidad internacional debe garantizar que las transferencias de instrucción militar, de seguridad y policial a Guatemala no contribuyen a la comisión de violaciones de derechos humanos.

35. La comunidad internacional garantizará que se incluye un componente firme y preceptivo relacionado con la protección y promoción de los derechos humanos en toda clase de formación militar, de seguridad o policial para las fuerzas de seguridad de Guatemala, ya se imparta a través de MINUGUA o directamente a través de la cooperación bilateral o multinacional. Esta formación debe garantizar que las prácticas policiales y militares cumplen las normas internacionales de derechos humanos, por lo que los instructores deberán poseer conocimientos demostrables de tales normas.

Asimismo, la formación, no siendo por sí sola suficiente, debe ir unida a medidas efectivas para poner fin a la impunidad y asegurar que las fuerzas de seguridad de Guatemala responden de las violaciones de derechos humanos que han cometido.

Amnesty International's Recommendations to the Guatemalan authorities

The government, the Public Ministry, Congress and the judiciary have a duty to do everything possible within their spheres of responsibility to break the cycle of impunity in Guatemala.

Their efforts should concentrate on a series of measures which Amnesty International is putting forward as a:

35-POINT PROGRAM TO END IMPUNITY AND HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN GUATEMALA

Bringing those responsible to justice

1. The authorities should ensure that all reports and allegations of extrajudicial executions, torture and "disappearances" are investigated without delay, impartially and effectively; these investigations should be under the responsibility of a body which has no connection to those allegedly responsible and which has the powers and resources necessary to carry them out. The methods and conclusions of the investigation should be made public.

Investigations into extrajudicial executions and “disappearances” should be carried out in accordance with the *Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions* and the *Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*.

Security force agents responsible for extrajudicial executions, “disappearances” and torture should be brought to justice in accordance with international standards for fair trials. This principle must be upheld in all cases, independently of where the perpetrators happen to be, the place where the crime was committed and the nationality of those responsible or the victims.

The government should immediately carry out all pending warrants for the arrest of security force agents and private police, who should be detained according to the rule of law.

As a consequence of this recommendation, where there is evidence suggesting that an agent of the security forces has been involved in “disappearances”, extrajudicial executions or torture, the relevant authorities should ensure that he is immediately suspended from his post pending prosecution and should make this decision public.

The authorities should also set up an information system to ensure that no agent of the security forces dismissed because of possible involvement in a human rights violation is employed in other official departments on similar duties.

Similarly the authorities should act *ex officio* in order to ensure that, in the absence of a formal complaint by the victim or his or her relatives, an investigation may be initiated and is not curtailed.

2. The government should not introduce any legislative measures, such as the National Reconciliation Law which has already been passed, which could prevent investigations into human rights violations committed by security force agents, the prosecution of those alleged responsible, their sentencing in the event that they are found guilty and adequate reparation for the victims; the government should repeal the relevant provisions of earlier amnesty laws.

The government should also avoid granting *de facto* pardons. The organization considers that, parallel to a demobilisation process verified by bodies independent of the Executive, investigations should be initiated to bring to justice those former military commissioners and members of the

Voluntary Civil Defence Committees responsible for grave human rights violations, such as torture, “disappearances” and extrajudicial executions.

3. The Historical Clarification Commission should identify not only the direct perpetrators of torture, extrajudicial executions and “disappearances”, but also those who planned or ordered them, establishing chain of command responsibility. It should have access to statements, documentary evidence or other information related to military intelligence or the security forces if relevant to the case or situation which it is investigating. Existing forensic medical records and court files should also be made available. Civilian and military officials, whether on active service or retired, should be obliged to collaborate with the Commission.

Amnesty International considers that, in order to create a climate in which respect for human rights can flourish in Guatemala, the process set in motion by the Commission should be based on the thorough knowledge of the *whole* truth about human rights violations and abuses committed during the period under investigation. All victims and their relatives have the right to register their cases officially and to have the facts totally clarified.

The Commission should be empowered to investigate the fate and whereabouts of those who “disappeared” following their arrest by State agents or persons linked to them. Such investigations should identify the location of clandestine cemeteries.

The Commission should investigate deliberate and arbitrary killings, attributed to the URNG and to former armed opposition groups, of military personnel or persons linked to the military, government agents and other persons held by these groups. Amnesty International considers that deliberate and arbitrary killings and torture of persons deprived of their liberty by armed opposition groups should also fall within the Commission’s scope. Amnesty International urges the URNG to provide the Commission with all the information necessary to carry out these investigations.

Furthermore, the Commission should and must recommend legal, political or administrative measures to prevent the repetition of these acts and should insist that the results of its investigations be taken up by the appropriate courts of law.

Similarly, the Commission should ensure that superior officers are held responsible for acts committed by personnel under their command when

there are sufficient grounds to suppose that they could have prevented or punished these acts.

The Commission should ensure that all victims of such human rights violations and abuses, as well as their relatives, receive the compensation and reparation prescribed in international standards.

Finally, the Commission should receive adequate human and material resources from the State to guarantee effective examination of all the evidence and allegations.

4. The appropriate authorities should ensure that all allegations concerning clandestine cemeteries are investigated without delay, impartially and effectively, that the investigating body has no connection to those allegedly responsible and that it is empowered with the means and resources needed to carry out these investigations. The methods and conclusions of the investigations should be made public.

The methodology of the exhumations, autopsies and analysis of skeletal remains should conform to the model protocols proposed by the United Nations, based on the *Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions* and on the Model Autopsy Protocol included in the *UN Manual on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions*.

Through the appropriate chain of command, the government should ensure the co-operation of the army in the investigations, making clear that the destruction of evidence, the obstruction of justice or threats against those involved in the exhumations will not be tolerated but will be considered a criminal offence.

5. The government should disband "death squads", private armies, criminal gangs and paramilitary forces which, although outside the official chain of command, operate with the support or consent of the State, and should ensure that members of these groups who have committed extrajudicial executions, torture or "disappearances" are brought to justice.

Prevention of human rights violations

6. Those responsible for the security forces should maintain strict chain of command responsibility to ensure that agents under their command do not commit extrajudicial executions, "disappearances" and torture. Officers who order or permit agents under their command to commit human rights violations should be brought to justice for such acts.

7. The government and relevant State bodies should comply with the recommendations of the Human Rights Procurator and it should be possible to hold officials to account before the courts in the event of non compliance.

8. The government, the judiciary, Congress and the Public Ministry should commit themselves publicly and decisively to respect, in the course of their duties, article 46 of the Constitution which establishes "the general principle that, in matters relating to human rights, the treaties and conventions ratified by Guatemala take precedence over domestic law" and should acknowledge the contribution of international organizations to the protection and defence of human rights by complying with the recommendations made by MINUGUA.

The government should ensure that Guatemala ratifies the *Inter-American Convention on the Forced Disappearance of Persons*.

It should also incorporate into Guatemalan legislation the UN *Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions* and the *Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*.

9. The government should guarantee effective protection to people at risk of extrajudicial execution or "disappearance", as well as to those who receive death threats.

To this end, the government and the Public Ministry should provide the resources needed to implement the measures established under the Law on the Protection of Witnesses and Defendants and Persons Linked to the Administration of the Criminal Justice System² to protect those persons who are threatened or who run the risk of being threatened in the course of judicial proceedings.

The government and the Attorney General's Office should put this law into practice with immediate effect and apply it to those trials in which threats,

² Decree No. 70-96, 27 August 1996.

intimidation and other human rights violations have already been committed during the proceedings, allegedly by security force agents. The authorities responsible for putting this law into practice should report periodically on its application.

10. The government should adopt and publish a code of conduct for all agents of the State security forces and private police which operate as auxiliaries of the security forces. This code should be based on the UN *Code of Conduct for Law Enforcement Officials* and on the *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*.

Non-compliance with this code should lead immediately to disciplinary action and criminal prosecution of the agents involved.

11. The government should ensure that all security force agents and private police receive appropriate training on human rights provisions in national and international law, as well as on measures for human rights protection.

Implementation of judicial guarantees

12. The government should provide the Public Ministry, the judiciary and the Human Rights Procurator with the technical and financial resources to carry out their duties adequately by maintaining a co-ordinated, effective and permanent presence throughout the country.

13. The government should undertake immediately the reforms to the judicial system set out in the *Agreement on the Strengthening of Civilian Power and the Role of the Army in a Democratic Society* in order to guarantee the right to unimpeded access to justice and the right to a fair, prompt and impartial trial, in particular through the establishment of a Public Criminal Defence Service, which should be independent, endowed with the necessary resources and personnel to cover all parts of the country and able to provide easy and direct access to justice for the indigenous population, in accordance with the *Agreement on the Identity and Rights of Indigenous Peoples*.

14. International standards regarding the judiciary, including the UN *Basic Principles on the Independence of the Judiciary*, should be incorporated into Guatemalan legislation and reflected in legal practice in order to create an independent, impartial and effective judiciary. In order to comply with these

Principles, the necessary resources should be provided and all allegations of corruption, particularly in cases of human rights violations, should be investigated promptly and impartially.

Abolition of the Death Penalty

15. The government should abolish the death penalty, which violates the fundamental right to life, and should ratify the Second Optional Protocol to the *International Covenant on Civil and Political Rights*.

16. Pending abolition, the government should not extend the application of the death penalty so as not to contravene international human rights standards such as the *American Convention on Human Rights*, Article 4.2 of which states that: "The application of such punishment shall not be extended to crimes to which it does not presently apply".

17. Pending abolition, the government and the appropriate judicial bodies should ensure all due process guarantees to defendants in capital cases, particular the right to minimum defence guarantees. The death penalty may only be imposed when the guilt of the defendant is established on the basis of clear and convincing evidence.

The defence of those charged with crimes which could carry the death penalty should only be undertaken by qualified, practising lawyers.

Those sentenced to death should be provided guarantees in accordance with relevant international standards, particularly the *International Covenant on Civil and Political Rights* and the *Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*, adopted by the United Nations Economic and Social Council.

Protection of Human Rights Defenders

18. The government should publicly recognize the legitimacy of the role of those who defend human rights and their "right to defend them". It should also guarantee, in an effective manner, the free exercise of the right to promote and defend human rights and should not promote or support legal restrictions which could impede this right.

19. The government should issue the necessary instructions to guarantee that statements made by security force agents cease to link the defence of human rights with "subversive" activities.

20. The government, in compliance with the *Global Human Rights Accord*, should take all necessary steps to effectively prevent threats, intimidation or other human rights violations against human rights defenders. Those responsible for such acts should immediately be brought to justice.

21. The government should actively support the approval and incorporation into Guatemalan legislation, without delay, of the *Declaration on Human Rights Defenders* which is being debated at the United Nations Commission on Human Rights; within the framework of the regional system for the protection of human rights, it should support the drafting of an *Inter-American Declaration on the Protection of Human Rights Defenders*.

Reparation for the Victims

22. The victims of human rights violations committed by agents of the State, or by individuals acting with the State's consent, should receive adequate reparation. Amnesty International considers that reparation should include financial compensation and rehabilitation measures, as well as medical care and assistance which would help the victim and his or her relatives to overcome the consequences of physical or psychological injury. It should also include any legal measures necessary to restore the victim's dignity and reputation.

The body responsible for handling reparation for the victims should receive the necessary resources to carry out its work.

23. Congress should move forward swiftly with the discussion of the Statute of the Guatemalan Institute for Comprehensive Care for Victims of Human Rights Violations, which has been before Congress since 12 March 1996. This Statute should be in accordance with the *Global Human Rights Accord* and with provisions of international law which recognize the right of victims to reparation.

Protection of returnees and the internally displaced

24. The government should comply with the requirements of the *Agreement of 8 October 1992 concerning the Organized and Collective Return of the Refugee Population to Guatemalan Territory* and the *Agreement on the Resettlement of the Population Uprooted by the Armed Conflict* and should

guarantee the protection and security of returnees and the internally displaced.

These guarantees should include the permanent and co-ordinated presence of the civilian authorities in communities of returnees and the internally displaced. The authorities should consult with the returnee and internally displaced communities and international organizations, as well as the Public Ministry, the Ministry of the Interior and the Office of the Human Rights Procurator.

25. The government, through the appropriate chain of command, should issue explicit orders to the commanders of military detachments and heads of the Voluntary Civil Defence Committees based close to the communities of returnees and internally displaced who are returning to their original communities, to the effect that they should act within the framework of national and international law and that invoking any exceptional circumstance as justification for violating the human rights of these members of the population will not be permitted. If such violations occur, the government should ensure that investigations are opened and that those responsible are held to account.

26. Through the appropriate chain of command, the government should issue clear and explicit orders to security force agents, especially the army and, in particular, military detachments based close to returnee communities, that in future any unfounded statements linking these communities to "subversion" will not be tolerated.

27. The government should ensure that security force agents, especially members of the army and, in particular, military detachments based close to the communities of returnees and the internally displaced, are trained to respect the *Code of Conduct for Law Enforcement Officials* and the *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* in the course of their daily activities.

Recommendations to the international community

Guaranteeing respect for human rights and an end to impunity

28. The international community should maintain its presence and influence in Guatemala, through the work of MINUGUA and the independent expert of the United Nations, until there are clear and unequivocal signs that the

policies and practices which gave rise to grave human rights violations have ended.

"Clear and unequivocal signs" should be understood as being: evidence that those responsible for human rights violations are being brought to justice; evidence that extrajudicial executions, "disappearances", torture, ill-treatment or death threats are no longer occurring; evidence of the ability and capacity of the State to investigate human rights violations thoroughly, independently and impartially, without risk of interference by security force agents in the judicial proceedings; and evidence of the State's capacity and ability to supervise and regulate the official bodies responsible for the protection and defence of human rights. The specific criteria used to assess and measure this progress should be based on long term trends and not on short term statistical data.

It is important, therefore, that sufficient resources are made available to ensure the continued operation of the United Nations Mission and the protection of human rights through rigorous verification of the agreements concluded within the framework of the peace process.

29. The international community should also ensure that the verification, follow up and public denunciation of individual complaints of human rights violations continue to be the focus and main priority of the human rights component of the United Nations Mission in Guatemala and that peace-building measures, such as institutional and legislative reforms, education and training, always complement the verification role.

30. In order to supervise the full implementation of MINUGUA's recommendations regarding compliance with the *Global Human Rights Accord*, national and international mechanisms should be set up to tackle non compliance. These mechanisms should seek guarantees that those who have committed, authorised, planned or covered up human rights violations will be brought to justice and that appropriate disciplinary measures are taken against anybody who obstructs implementation of the recommendations or fails to implement them fully. These mechanisms should be established with the collaboration and participation of non-governmental human rights organizations and should pay particular attention to the supervision of the judiciary and the judicial system.

31. Assistance should be made available to safeguard human rights projects already initiated by MINUGUA, aimed at establishing *permanent, independent and effective* national institutions for the long-term protection of human rights and the restoration of the rule of law, including an independent judiciary and a criminal justice system which offers the appropriate guarantees. While

Amnesty International considers that national institutions, and human rights commissions in particular, can play an important role in strengthening human rights protection, they should never substitute or undermine the safeguards inherent in a comprehensive and effective judicial framework, enforced by an independent and accessible judiciary. It is important that such initiatives are accompanied by a firm policy against impunity in order to prevent such institutions serving to shield rather than expose those who have violated human rights.

32. Finally, before the withdrawal of MINUGUA, the international community should establish safeguards guaranteeing protection to those persons who have collaborated with the Mission and protection of the information it has gathered.

Collaboration with the Historical Clarification Commission

33. Governments should make available to the Commission for the Historical Clarification of Human Rights Violations and Acts of Violence which have Caused Suffering to the Guatemalan People (also known as the Historical Clarification Commission), all available information on the collaboration of officials of other governments with Guatemalan officials in encouraging, facilitating or covering up human rights violations by the security forces or abuses by armed opposition groups in the period under investigation. This should include information regarding the international transfer of military, security or police equipment, technology or training, the principal aim of which, in practice, was the violation of human rights.

Police and Military Training

34. The international community should guarantee that international military, security and police training to Guatemala does not contribute to the violation of human rights.

35. The international community should guarantee that any form of military, security or police training for the Guatemalan security forces includes a solid and obligatory component regarding the protection and promotion of human rights, whether imparted through MINUGUA or directly through bilateral or multinational co-operation. This training should guarantee that police and military practice complies with international human rights standards and therefore trainers must have demonstrable knowledge of these standards.

Moreover, since training is not sufficient in itself, it should be linked to effective measures to put an end to impunity and to ensure that the Guatemalan security forces are held accountable for the human rights violations which they have committed.
